QUINTA. Registro de personas jurídicas sancionadas

El Poder Judicial implementa un registro informático de carácter público para la inscripción de las medidas impuestas a las personas jurídicas, con expresa mención del nombre, clase de medida y duración de la misma, así como el detalle del órgano jurisdiccional y fecha de la sentencia firme, sin perjuicio de consar ante los Registros Públicos para la publicidad material que pudiera corresponder.

En caso de que las personas jurídicas cumplan con la medida impuesta, el juez, de oficio o a pedido de parte, ordena su retiro del registro, salvo que la medida tenga carácter definitiva.

El Poder Judicial puede suscribir convenios con el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), entre otras instituciones, para compartir la información que conste en el registro.

El Poder Judicial, en el plazo de noventa días hábiles contados a partir de la publicación del presente Decreto Legislativo, emite las disposiciones reglamentarias pertinentes que establezcan los procedimientos, acceso restricciones, funcionamiento del registro y demás aspectos necesarios para su efectiva implementación.

OCTAVA. Funciones de la Superintendencia del Mercado de Valores - SMV

Dispóngase que la SMV está facultada para emitir el informe técnico con calidad de perito institucional, y que constituye un requisito de procedibilidad para la formalización de la investigación preparatoria por los delitos contenidos en el artículo 1 de la presente norma.

El informe que emita la Intendencia de funcionamiento de los modelos de prevención debe ser emitido dentro de los plazos diálogo desde la recepción del pedido [illegible] que lo requiera."

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA

ÚNICA.- Derogación

Derógase el artículo 19, la Sexta Disposición Complementaria y la Sétima Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley N° 30424. Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de cohecho activo transnacional y el artículo 8 del Decreto Legislativo N° 1106, Decreto Legislativo de Lucha E?caz contra el lavado de activo y otros delitos relacionados a la minería legal y crimen organizado.

POR TANTO:

Mando que se publique y se cumpla, dando cuenta al Congreso de la República.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los seis días del mes de enero del año dos mil diecisiete.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Presidente del Consejo de Ministros

MaRIia SOLEDAD PéREz TELLO
Ministra de Justicia y Derechos Humanos

1471551-4

DECRETO LEGISLATIVO N° 1353

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

Que, mediante Ley N° 30506, "Ley que delega en el Poder Ejecutivo la Facultad de legislar en materia de reactivación económica y formalización, seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción, agua y saneamiento y reorganización de Petroperú S.A.", el Congreso de la República ha delegado en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de lucha contra la corrupción, por el término de noventa (90) días calendario.

Que, en este sentido, los literales a) y b) del inciso 3 del artículo 2 del citado dispositivo legal establece que el Poder Ejecutivo está facultado para legislar en materia de lucha contra la corrupción a 7n de crear la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como establecer medidas orientadas a la lucha contra la corrupción provenente de cualquier persona, incluyendo medidas para facilitar la participación de los ciudadanos mediante mecanismos que permitan la oportuna y e?caz recepción de denuncias sobre actos de corrupción.

De conformidad con lo establecido en el literal a) y b) del inciso 3 del artículo 2 de la Ley N° 30506 y el artículo 104 de la Constitución Política del Perú;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;

Con cargo a dar cuenta al Congreso de la República;

Ha ido el Decreto Legislativo que sigue:

DECRETO LEGISLATIVO QUE CREA LA AUTORIDAD NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, FORTALECE EL MARCO LEGAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y LA REGULACIÓN DE LA GESTIÓN DE INTERESES

CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Objeto

El presente Decreto Legislativo tiene por objeto crea la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, fortalecer el Marco Legal de Protección de Datos Personales y la regulación de la gestión de intereses.

Artículo 2.- Ámbito de aplicación

Las disposiciones previstas en el presente Decreto Legislativo son aplicables a todas las entidades señaladas en el artículo I del Título Preliminar de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento administrativo General; así como a las personas naturales o jurídicas, personas naturales o jurídicas de derecho privado, en lo que corresponda, y a las personas naturales o jurídicas de la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales.

CAPITULO II
DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Artículo 3.- Naturaleza jurídica y competencias de la Autoridad

La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en adelante la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en adelante la autoridad.

La Autoridad se rige por lo dispuesto en la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por esta Ley y las normas reglamentarias.

Artículo 4.- Funciones de la Autoridad

La autoridad tiene las siguientes funciones en materia de transparencia y acceso a la información pública:

1. Proponer políticas en materia de transparencia y acceso a la información pública.
2. Emitir directivas y lineamientos que sean necesarios para el cumplimiento de las normas en el ámbito de su competencia.
3. Supervisar el cumplimiento de las normas en materia de transparencia y acceso a la información pública.
4. Absolver las consultas que las entidades o las personas jurídicas o naturales le formulen respecto de la aplicación de normas de transparencia y acceso a información pública.
5. Fomentar la cultura de transparencia y acceso a la información pública.

6. Registro, dentro del ámbito de su competencia, la información que considere necesaria a las entidades, las cuales están en la obligación de proveerla, salvo las excepciones previstas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
7. Elaborar y presentar al Congreso de la República el informe anual sobre los pedidos de acceso a la información pública. Este informe se presenta dentro del primer trimestre de cada año y es publicado en la página web de la autoridad.
8. Supervisar el cumplimiento de la actualización del Portal de Transparencia.
9. Otras que se establezcan en las normas reglamentarias

Artículo 5.- Lineamientos en materia de clasi?cación y desclasi?cación de la información

Los sectores vinculados a las excepciones establecidas en los artículos 15, 16y 17del TextoÚnicoOrdenadodeLey N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública elaboran, de forma conjunta con la autoridad, lineamientos para la clasi?cación y desclasi?cación de la información que se considere con?dencial, secreta o reservada. Dichos lineamientos se establecen a través de Decreto Supremo con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos y el Ministro de Economía y Finanzas.

Artículo 6.- Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública

El Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública es un órgano resolutivo de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Su competencia se extiende a la última instancia administrativa en materia de transparencia y derecho de acceso a la información pública a nivel nacional. Como tal es competente para conocer en forma exclusiva y excluyente en dichas materias. Depende administrativamente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y goza de autonomía Su funcionamiento se rige por las disposiciones contenidas en la presente Ley y en sus normas complementarias y reglamentarias.

Artículo 7.- Funciones del Tribunal

El Tribunal tiene las siguientes funciones:

1. Resolver los recursos de apelación contra resoluciones de las entidades comprendidas en el artículo I del Título Preliminar de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento administrativo General, en materia de transparencia y acceso a la información pública. Su decisión agota la vía administrativa.
2. Resolver, en última instancia administrativa, los recursos de apelación que interpongan los funcionarios y servidores públicos sancionados por el incumplimiento de las normas de transparencia y acceso a la información pública en los términos establecidos en el artículo siguiente.
3. Dirimir mediante opinión vinculante los casos en los que se presente con?icto entre la aplicación de la Ley 27733, Ley de Protección de Datos Personales y de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
4. Establecer precedentes vinculantes cuando así lo acuerde el pleno del Tribunal, mediante acuerdo, en los casos en que se interpretan disposiciones en materia de Datos O?cial El Peruano y en su portal institucional.
5. Cualquier otra función que le asigne el interés.
6. Las demás que establece el Reglamento.

Artículo 8.- Aplicación de sanciones a servidores públicos

En los casos de apelación previstos en el numeral 2 del artículo 7, el Tribunal, de ser conforme, revoca o anula en todos sus extremos la decisión adoptada por la entidad en el procedimiento administrativo sancionador, la entidad está obligada a cumplir la decisión de la autoridad no pudiendo acudir a la vía contencioso-administrativa para cuestionarla.

En caso la sanción impuesta por la entidad sea la destitución, el servidor sancionado, corresponde que el Tribunal ordene mediante un informe que constituye prueba pre-constituida que será remitido al Tribunal del Servicio Civil, para que este resuelva la apelación.

Artículo 9.- Alcances del procedimiento de apelación para entrega de información

9.1 [illegible] de información [illegible] Tribunal [illegible] o revocar la decisión de la entidad. Dentro de este procedimiento, el Tribunal solicita a la entidad que remita sus descargos. De considerar insu?ciente el descargo, solicita la remisión de la información sobre la cual versa la apelación. De declararse fundada la apelación, el Tribunal ordena a la entidad obligada que entregue la información que solicitó y administrado.

9.2 En el marco del procedimiento administrativo de apelación al que se re?ere el numeral anterior, resultan de aplicación los supuestos establecidos en los artículos 15, 16 y 17 del TextoÚnicoOrdenadodeLey N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado mediante Decreto Supremo N° 043-2003-PCM, así como los supuestos de excepción al acceso a la información regulados en leyes especiales.

Artículo 10.- De la con?dencialidad de la Información

10.1. Los servidores públicos de la autoridad y del Tribunal, bajo responsabilidad, tienen la obligación de no hacer uso de la información que conozcan para fines distintos al ejercicio de sus funciones.

10.2 Cuando se trate de información secreta, reservada o con?dencial, tienen la obligación del cuidado diligente si toman conocimiento de ella en el ejercicio de sus cargos, asimismo, no pueden hacer de conocimiento público la información a la que tengan acceso en razón de su cargo, salvo que se trate de información que constituya evidencia de mantenga la condición de secreta, reservada o con?dencial.

La información a la que se hace referencia es considerada falta grave, perjuicio de la responsabilidad civil o penal que conlleve.

Artículo 11.- Conformación del Tribunal

El Tribunal está conformado por tres (3) vocales designados mediante Resolución Suprema por un periodo de cuatro (4) años, previo concurso público realizado conforme a lo establecido por el Reglamento. al menos un vocalo debe ser abogado.

Artículo 12.- Requisitos para ser Vocal del Tribunal

12.1 Los vocales del Tribunal deben cumplir los siguientes requisitos mínimos:

1. No haber cumplido 35 años de edad.
2. Contar con título profesional o grado de bachiller universitario.
3. No contar con antecedentes penales ni judiciales.
4. No encontrarse suspendido o inhabilitado en el ejercicio de la función pública por decisión administrativa firme o sentencia judicial con calidad de cosa juzgada.
5. Contar con 10 años de experiencia profesional acreditada, los cuales al menos 3 años deben ser en o con la administración pública.
6. No estar en situación de concurso, inhabilitado para contratar con el Estado o encontrarse condenado por delito doloso incompatible con el ejercicio de la función.
7. No encontrarse inscrito en el Registro de Deudores alimentarios morosos.
8. No tener con?icto de intereses con las materias relacionadas al ejercicio de su función.

12.2 En caso de vencimiento del plazo del mandato, el vocal ejerce funciones hasta la designación del reemplazante.

Artículo 13.- Deber de colaboración

13.1 Los servidores y funcionarios de la autoridad y el Tribunal, las entidades, sus servidores civiles y funcionarios públicos, las personas naturales o jurídicas están obligadas a atender oportunamente y bajo responsabilidad, cualquiera de los requerimientos u solicitudes.

Artículo 14.- Inhibición

14.1 Los vocales del Tribunal, de o?cio, se abstienen de participar en los procedimientos en los cuales identifiquen que encuentran en alguna de las causales previstas en el artículo 88 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento administrativo General, en la primera oportunidad en que conozcan acerca del procedimiento especí?co en el que exista alguna incompatibilidad que impida su participación

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

Primera.- Reglamento

El Poder Ejecutivo, mediante Decreto Supremo, con voto aprobatorio del Consejo de Ministros, aprueba el

El Peruano/ Sábado 7 de enero de 2017 NORMAS LEGALES 75

Reglamento del presente Decreto Legislativo en un plazo máximo de noventa (90) días calendario contados a partir del día siguiente de la publicación en el. Diario O?cial El Peruano del presente Decreto Legislativo.

Segunda.- Vigencia

El presente Decreto Legislativo entra en vigencia al día siguiente de la publicación del Decreto Supremo que aprueba su Reglamento y la Nueva Estructura Orgánica de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Tercera.- Designación de miembros del Tribunal

Los miembros del Tribunal son designados en un plazo no mayor a noventa (90) días contados a partir de la fecha de entrada en vigencia de la mod?ficación del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Cuarta.- Financiamiento

La implementación del presente Decreto Legislativo se financia con cargo al presupuesto institucional del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS MODIFICATORIAS

Primera.- Mod?cación de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme a su Texto Único Ordenado, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM

Modifícanse los artículos 11y 13 de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme a su Texto Único Ordenado, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM, en los siguientes términos:

"Artículo 11.- Procedimiento

El acceso a la información pública se sujeta al siguiente procedimiento:

a) Toda solicitud de información debe ser dirigida al funcionario designado por la entidad de la administración Pública para recibir esta labor. En caso de que no se hubiera sido designado, la solicitud se dirige al funcionario que tiene en su poder la información requerida o que puede intermediar.Lasdependenciasdeentidadesenlasdelegación de encausar las solicitudes al funcionario encargado.

b) La entidad de la administración Pública a la cual se ha presentado la solicitud de información requerida otorgarla en un plazo no mayor de doce (12) días hábiles, sin perjuicio de lo dispuesto en el literal h).

En el supuesto que la entidad de la administración Pública no posea la información solicitada, pero considere que de haya poseerla o obligación de poseerla, debe remitir la solicitud hacia la entidad obligada o hacia la que la posea, y poner en conocimiento de dicha circunstancia al peticionario.

c) La denegatoria al acceso a la información se sujeta a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 13 de la presente Ley.

d) De no mediar respuesta en el plazo previsto en el inciso b), el solicitado puede considerar denegado su pedido.

e) En los casos señalados en los incisos c) y d) del presente artículo, el solicitante en un plazo no mayor de quince (15) días calendarios puede interponer el recurso de apelación ante el Tribunal de Transparencia y acceso a la Información Pública, el cual deberá resolver dicho recurso en el plazo máximo de diez (10) días hábiles, bajo responsabilidad.

f) La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, no resuelve el recurso de apelación en el plazo previsto, el solicitante podrá dar por agotada la vía administrativa.

g) Excepcionalmente, cuando sea materialmente imposible cumplir con el plazo señalado en el literal b) debido a causas justi?cadas relacionadas a la comprobada y mani?esta falta de capacidad logística u operativa o de recursos humanos de la entidad o' al sign?cativo volumen de la información solicitada, por única vez la entidad debe comunicar al solicitante la fecha en que proporcionará la información solicitada de forma debidamente fundamentada en un plazo máximo de dos (2) días hábiles de recibido el pedido de información. El incumplimiento de este plazo faculta al solicitante a recurrir ante Autoridad Nacional Transparencia y Acceso a la Información Pública.

"Artículo 13.- Denegatoria de acceso

La entidad de la administración Pública a la cual se solicita información no podrá negar la misma basando su decisión en razones de seguridad nacional.

La entidad de la administración Pública a la información solicitada debe ser debidamente fundamentada poralas excepciones de ley, incluyendo el Ley N° 27806 y el Ley N° 27806 y el que se prolongará dicho impedimento.

La entidad de la administración Pública debe comunicar por escrito que la denegatoria de la solicitud se debe a la información requerida o parte de ella, respecto de la información solicitada.

Es ésta la razón por la cual los solicitantes exijan a las entidades que efectúen evaluaciones o análisis de la información que poseen. No cuál?can en esta información, procesamiento de datos preexistentes de acuerdo con lo que requieran los solicitantes, siempre que ello no sea de o?ciopara recabar o generar información de datos.

No se podrá negar información cuando se solicite que esta sea entregada en un determinado formato o medio siempre que el solicitante asuma el costo que suponga el pedido.

Cuando una entidad de la administración Pública no localizara información que está obligada a poseer o custodiar deberá acreditar que ha agotado las acciones necesarias para su ubicación y dar por concluida su búsqueda.

Si el requerimiento de información no hubiere sido satisfecho, la entidad de la administración pública no se hubieren cumplido las exigencias precedentes, se entenderá que existe negativa en la información pública.

Segunda.- Incorporación del Título V a la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme a su Texto Único Ordenado, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM

Incorpórese el Título V a la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme su Texto Único Ordenado, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM, en los siguientes términos:

"TÍTULO V
RÉGIMEN SANCIONADOR

Artículo 34.- Ámbito de aplicación

El presente Régimen sancionador es aplicable a las acciones u omisiones que infringan el régimen jurídico de la transparencia y acceso a la información pública, ésto?acadas en este Título, de conformidad con el artículo 4 de la presente Ley.

Artículo 35.- Clases de sanciones

Las infracciones previstas en el presente régimen sancionador son las siguientes:

a) amonestación escrita.
b) multa, en goce de haber entre diez y cinto ocherta días.
c) Multa no mayor de cinco unidades impositivas tributarias.
d) Destitución.
e) Inhabilitación.

35.2 Las personas jurídicas bajo el régimen privado que presten servicios públicos o ejerzan función administrativa, el virtud de concesión, delegación o autorización, están sujetas a las sanciones administrativas de multa conforme a la normatividad de la materia.

Artículo 36.- Tipi?cación de infracciones

Las infracciones se clasi?can en leves, graves y muy graves, las cuales son tipi?cadas vía reglamentaria, de acuerdo a lo establecido en el numeral 4) del artículo 230 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Sin perjuicio de las sanciones que en el marco de su competencia impongan las autoridades competentes, pueden ordenar la implementación de una o más medidas correctivas, con el objetivo de corregir o revertir los efectos que la conducta infractora hubiere ocasionado o evitar que ésta se produzca nuevamente.

Artículo 37.- Responsabilidad

La responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos por el incumplimiento de obligaciones derivadas de las normas sobre transparencia y acceso de la información pública, es subjetiva.

"Tercera.- Modi?cación de los artículos 2, 3, 12, 14, 15, 18, 20, 21, 22, 25 y 27 de la Ley N° 29733, Ley de protección de datos personales

Modi?case los artículos 2, 3, 12, 14, 15, 18, 20, 21, 22, 25 y 27 de la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales, en los siguientes términos:

"Artículo 2. Ds?nciones

Para todos los efectos de la presente Ley, se entiende por:

1. Banco de datos personales. Conjunto organizado de datos personales, automatizado o no, independiente del soporte, sea esto físico, magnético, óptico o en otro análogo, cualquiera que fuere la forma o modalidad de su creación, formación, almacenamiento, organización y acceso.

2. Banco de datos personales de administración privada. Banco de datos personales cuya titularidad corresponde a una persona natural o a una persona jurídica de derecho privado, en cuanto el banco no se encuentre enfrentamiento vinculado al ejercicio de potestades de derecho público.

3. Banco de datos personales de administración pública. Banco de datos personales cuya titularidad corresponde a una entidad pública.

4. Datos personales. Toda información sobre una persona natural que hacen identificada o la hace identificable a través de medios que pueden ser razonablemente empleados por cualquier persona.

5. Datos sensibles. Datos personales constituidos por los datos biométricos que por sí mismos pueden identi?car al titular; datos referidos a origen racial y étnico; ingresos económicos; opiniones o convicciones políticas, religiosas, filosó?cas o morales; a?liación sindical, e información relacionada a la salud o a la vida sexual.

6. Días. Días hábiles.

7. Encargado de tratamiento de datos personales. Toda persona natural, persona jurídica de derecho privado o entidad pública que sola o actuando conjuntamente con otra realiza el tratamiento de datos personales por encargo del titular del banco de datos personales en virtud de una relación jurídica que le vincula con el mismo y delimita el ámbito de su actuación. Incluye a quien realice el tratamiento sin la existencia de un banco de datos personales.

8. Encargo de tratamiento. Entrega por parte del titular de un banco de datos personales a su encargado de tratamiento, en virtud de una relación jurídica que los vincula. Dicha relación jurídica delimita el ámbito de actuación del encargado de tratamiento de datos personales.

9 Entidad pública. Entidad comprendida en el artículo I del Título Preliminar de la Ley 27444, Ley del Procedimiento administrativo General, o que haga sus veces.

10. Flujo transfronterizo de datos personales. Transferencia internacional de datos personales a un destinatario situado en un país distinto al país de origen de los datos personales, sin importar el soporte en que estos se encuentren, los medios por los cuales se efectuó la transferencia y el tratamiento que reciban.

11. Fuentes accesibles para el público. Bancos de datos personales de administración pública o privada, que pueden ser consultados por cualquier persona, previo el pago de una contraprestación o sin ella, no existe prohibición alguna para su acceso o uso, y están disponibles para su consulta por el público, sin exigencia de interés alguno, ni mayor requisito que el pago de una contraprestación, cuando fuere el caso, las fuentes accesibles para el público son determinadas en el reglamento.

12. Nivel suficiente de protección para los datos personales. Nivel de protección que abarca por lo menos la consignación y el respetodeprincipiosrectoresdesatisfa, ey, así como medidas técnicas de seguridad y con?dencialidad apropiadas según la categoría de datos de que se trate.

13. Persona jurídica de derecho privado. Para efectos de esta Ley, la persona jurídica no comprendida en los alcances del artículo I del Título Preliminar de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

14. Procedimiento de anonimización. Tratamiento de datos personales que impide la identi?cación o que no hace identi?cable al titular de estos. El procedimiento es irreversible.

15. Procedimiento de disociación. Tratamiento de datos personales que impide la identi?cación o que no hace identi?cable al titular de estos. El procedimiento es reversible.

16. Titular de datos personales. Persona natural a quien corresponde los datos personales.

17. Titular del banco de datos personales. Persona natural, persona jurídica de derecho privado o entidad pública que determina la ?nalidad y contenido del banco de datos personales, el tratamiento de estos y las medidas de seguridad.

18. Transferencia de datos personales. Toda transmisión, suministro o manifestación de datos personales, de carácter nacional o internacional, a una persona jurídica de derecho privado, a una entidad pública o a una persona natural distinta del titular de datos personales.

19. Tratamiento de datos personales. Cualquier operación o procedimiento técnico, automatizado o no, que permite la recopilación, registro, organización, almacenamiento, conservación, elaboración, modi?cación, extracción, consulta, utilización, bloqueo, supresión, comunicación por transferencia o difusión o cualquier otra forma de procesamiento que facilite el acceso, correlación o interconexión de los datos personales".

"Artículo 3. Ámbito de aplicación

La presente Ley es de aplicación a los datos personales contenidos o destinados a ser contenidos en bancos de datos personales de administración pública y de administración privada, cuyo tratamiento se realiza en el territorio nacional. Son objeto de especial protección los datos sensibles.

Las disposiciones de esta Ley no son de aplicación a los siguientes datos personales:

1. A los contenidos o destinados a ser contenidos en bancos de datos personales creados por personas naturales para fines exclusivamente relacionados con su vida privada o familiar.

2. A los contenidos o destinados a ser contenidos en bancos de datos de administración pública, en tanto su tratamiento resulte necesario para el estricto cumplimiento de las competencias asignadas por ley a las respectivas entidades públicas, para la defensa nacional, seguridad pública, y para el desarrollo de actividades en materia penal para la investigación y represión del delito".

"Artículo 12. Valor de los principios

Los principios rectores al tratamiento de los datos personales y encargados de tratamiento de datos personales y, en general, de todos los principios establecidos en el presente Decreto Legislativo ajustarse a los principios rectores a que se ?ere este Título. Esta relación de principios rectores es enunciativa.

Los principios rectores señalados sirven también de criterio fundamental para resolver las cuestiones que se puedan suscitarse en la aplicación de esta Ley y de su reglamento, en cuanto no de parámetro para la creación de otras disposiciones y para suplir vacíos en la legislación sobre la materia.

"Artículo 14. Limitaciones al consentimiento para el tratamiento de datos personales

No se requiere el consentimiento del titular de datos personales, para los efectos de su tratamiento, en los siguientes casos:

1. Cuando los datos personales se recopilen o transfieran para el ejercicio de las funciones de las entidades públicas en ámbito de sus competencias.

2. Cuando se trate de datos personales contenidos o destinados a ser contenidos en fuentes accesibles para el público.

3. Cuando se trate de datos personales relativos a la solvencia patrimonial y de crédito, conforme a ley.

4. Cuando medie norma para la promoción de la competencia en los mercados regulados emitida en ejercicio de la función normativa por los organismos reguladores a que se ?ere la Ley 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, o la que haga sus veces, siempre que la información brindada no sea utilizada en perjuicio de la privacidad del usuario.

5. Cuando los datos personales sean necesarios para la preparación, celebración y ejecución de una relación contractual en la que el titular de datos personales sea parte, o cuando se trate de datos personales que deriven

de una relación científica o profesional del titular y sean necesarios para su desarrollo o cumplimiento.

6. Cuando se trate de datos personales relativos a la salud y sea necesario, en circunstancia de riesgo, para la prevención, diagnóstico y los tratamientos médicos o de ser del titular, siempre que dicho tratamiento sea realizado por establecimientos de salud o por profesionales en ciencias de la salud, observando el secreto profesional; o cuando medien razones de interés público previstas por ley o cuando deba tratarse por razones de salud pública, ambas razones deberen que se almacenarán, así como la identidad y domicilio del titular de los expedientes de la salud, en el ejercicio de la realización de estudios epidemiológicos o análogos, en tanto se apliquen procedimientos de disociación adecuados.

7. Cuando el tratamiento sea efectuado por organismos sin fines de lucro cuyo fin político, ?losó?co, ?losó?co o sindical y se refiera a los datos personales recopilados de sus miembros que mantengan relaciones institucionales con ellos, con propósito a que se circunscriben sus actividades, no pudiendo ser transferidos sin consentimiento de aquellos.

8. Cuando se hubiere aplicado un procedimiento de anonimización o disociación.

9. Cuando el tratamiento de los datos personales sea necesario para salvaguardar intereses legítimos del titular de datos personales por parte del titular del banco de datos o por el encargado de tratamiento de datos personales.

10. Cuando el tratamiento de los datos personales sea para fines vinculados al sistema de prevención de lavado de activos y ?nanciamiento del terrorismo u otros que respondan a un mandato legal.

11. En el caso de grupos económicos conformados por empresas que son responsables de bancos sujetos obligados a informar, conforme a las normas que regulan la Unidad de Inteligencia Financiera, acerca de aquellas personas que, de acuerdo con el sistema de prevención de riesgos de lavado de prevención de lavado de activos y ?nanciamiento del terrorismo, así como el cumplimiento de aquellas, establecieno las salvaguardas adecuadas sobre la con?dencialidad y uso de la información intercambiada.

12. Cuando el tratamiento se realiza en ejercicio constitucionalmente válido del derecho fundamental a la libertad de información.

13. Cuando sea ejercido dentro del ejercicio de competencias expresamente establecidas por ley.

"Artículo 15. Flujo transfronterizo de datos personales

El titular y el encargado de tratamiento de datos personales deben realizar el ?ujo transfronterizo de datos personales solo si el país de destinatario mantiene niveles de protección adecuados conforme a la presente Ley.

Si el país de destino no mantiene niveles adecuados con un nivel de protección adecuado, el envío del ?ujo transfronterizo de datos personales debe garantizar que el tratamiento de los mismos en el país de destino se efectúe conforme a lo dispuesto por la presente Ley.

No se podrá lo dispuesto en el segundo párrafo en los siguientes casos:

1. acuerdos en el marco de tratados internacionales sobre la materia de que forman la República del Perú sea parte.

2. Cooperación judicial internacional.

3. Cooperación internacional entre organismos de inteligencia para luchar contra el terrorismo, el tráfico ilícito de drogas, lavado de activos, corrupción, trata de personas y otras formas de criminalidad organizada.

4. Cuando los datos personales sean necesarios para la ejecución de una relación contractual en la que el titular de los datos personales sea parte, inclusivo lo necesario para actividades como la autenti?cación de usuario, mejora y soporte del servicio, monitoreo de la calidad del servicio, soporte para el mantenimiento y facturación de la cuenta y aquellas actividades que el marco de la relación contractual requiera.

5. Cuando se trate de transferencias bancarias o bursátiles, en lo relativo a las transacciones respectivas y conforme a la ley aplicable.

6. Cuando el ?ujo transfronterizo de datos personales se realice para la protección, prevención, diagnóstico o tratamiento médico o quirúrgico de su titular; o cuando sea necesario para la realización de estudios epidemiológicos o análogos, en tanto se apliquen procedimientos de disociación adecuados.

7. Cuando el titular de los datos personales haya dado su consentimiento previo, informado, expreso e inequívoco.

2. Otros que establezca el reglamento de la presente Ley, con sujeción a lo dispuesto en el artículo 12".

"Artículo 18. Derecho de información del titular de datos personales El titular de datos personales tiene derecho a ser informado en forma detallada, sencilla, expresa, inequívoca y de manera previa a la recopilación de sus datos personales; que sus datos personales serán tratados; quiénes son o pueden ser sus destinatarios; la existencia del banco de datos en que se almacenarán, así como la identidad y domicilio del titular del banco de datos personales o del encargado del tratamiento de sus datos personales; el carácter obligatorio o facultativo de sus respuestas a las preguntas que se le propongan, en especial en cuanto a los datos sensibles; la ?nalidad para la que sus datos personales serán tratados; de proporcionar sus datos personales y de su negativa a hacerlo; de la transferencia de los datos personales; de quienes pueden ejercer los derechos que les corresponden y de la conocer y los medios previstos para ello.

Si los datos personales son recogidos a través de bancos de datos personales o a través de otro medio que permita la recopilación de sus datos personales, el nuevo titular del banco de datos o quien resulte responsable de tratamiento de información e?caz para el titular de los datos personales debe informarle de la modalidad de tratamiento".

"Artículo 20. Derecho de actualización, inclusión, recti?cación y supresión

El titular de datos personales tiene derecho a la actualización, inclusión, recti?cación y supresión de sus datos personales materia de tratamiento, cuando estos sean parcial o totalmente inexactos, incompletos, erróneos, falsos, o hubiere sido?cado su contenido, o cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes a la ?nalidad para la cual hayan sido recopilados; o cuando hubiera venecido el plazo establecido para su tratamiento.

De ser el caso, el encargado de tratamiento de datos personales debe comunicar la actualización, inclusión, recti?cación o supresión a aquellos terceros que hubiera sido el caso que se mantenga el tratamiento por este último, quien debe también proceder a la actualización, inclusión, recti?cación o supresión, según corresponda.

Durante el procedimiento de actualización,recti?cación o supresión de datos personales, el encargado de tratamiento de datos personales bloquea el acceso a aquellos impedido de permitir que terceros accedan a ellos. Dicho bloqueo no aplica cuando las entidades públicas requieran ese tal información para el adecuado ejercicio de sus competencias, en tanto se ?nalice el procedimiento de actualización que se encuentra en trámite.

Los datos personales que hayan sido materia de tratamiento de datos personales durante el plazo que ?ere el artículo 20 del presente Decreto Legislativo, deben ser conservados en el plazo establecido en el artículo 21 del Texto Único Ordenado de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, o la que haga sus veces".

"Artículo 21. Derecho a impedir el suministro

El titular de datos personales tiene derecho a impedir que estos sean suministrados, especialmente cuando ello afecte sus derechos fundamentales. El derecho a impedir el suministro no aplica para la relación entre el titular del banco de datos personales y el encargado de tratamiento de datos personales para los efectos del tratamiento de estos".

"Artículo 22. Derecho de oposición

Siempre que, por ley, no se disponga lo contrario y cuando no hubiere presiado consentimiento, el titular de datos personales puede oponerse a su tratamiento cuando existan motivos fundados y legítimos relativos a una concreta situación personal. En caso de oposición justificada, el titular o el encargado de tratamiento de datos personales, según corresponda, debe proceder a su supresión, conforme a ley".

"Artículo 25. Derecho a ser indemnizado

El titular de datos personales que sea afectado a consecuencia del incumplimiento de la presente Ley por el titular o por el encargado de tratamiento de datos personales o por terceros, tiene derecho a obtener la indemnización correspondiente, conforme a ley".

"Artículo 27. Limitaciones

Los titulares de bancos de tratamiento de datos personales de administración pública pueden denegar el ejercicio de los derechos de acceso, supresión y oposiciónpor razones fundadas en la protección de derechos e intereses de terceros o cuando ello pueda obstaculizar actuaciones judiciales o administrativas en curso vinculadas a la investigación de obligaciones tributarias o previsionales, o las investigaciones penales sobre infracciones administrativas, o cuando así lo disponga la ley o el control de la salud y del medio ambiente, a la veri?cación de infracciones administrativas, o cuando así lo disponga la ley.

Cuarta.- Modi?cación de la denominación del Título IV y el artículo 28 de la Ley N° 29733, Ley de protección de datos personales

Modi?case la denominación del Título IV y el artículo 28 de la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales, en los siguientes términos:

"TÍTULO IV
OBLIGACIONESDELTITULDELdELcARGADO DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Artículo 28. Obligaciones

El titular y el encargado de tratamiento de datos personales, según sea el caso, tienen las siguientes obligaciones:

1. Efectuar el tratamiento de datos personales, solo previo consentimiento informado, expreso e inequívoco del titular de los datos personales, salvo las excepciones con excepción de los supuestos consignados en el artículo 14 de la presente Ley.

2. No recopilar datos personales por medios fraudulentos, desleales o ilícitos.

3. Recopilar datos personales que sean actualizados, necesarios, pertinentes y adecuados, con relación a ?nalidades determinadas, explícitas y lícitas para las que se hayan obtenido.

4. No almacenar los datos personales objeto de tratamiento en ?cheros, bancos de datos o soportes que ofrezcan un nivel de protección adecuado o inferior al que demanda la presente ley o el reglamento de la materia, salvo que medie procedimiento de anonimización o disociación.

5. Almacenar los datos personales de manera que se posibilite el ejercicio de los derechos de su titular.

6. Suprimir y no guardar o, en su caso, comprobado los datos personales objeto de tratamiento cuando tenga conocimiento de su carácter inexacto o incompleto, sin perjuicio de los derechos del titular al respecto.

7. Suprimir los datos personales cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes a la ?nalidad para la cual hubieren sido recopilados, o hubiese venecido el plazo para su tratamiento, salvo que medie procedimiento de anonimización o disociación.

8. Proporcionar a la Autoridad Nacional de Prot